



¿ES JUSTIFICABLE MANTENER LA ACTIVIDAD BASADA EN LA SUBVENCIÓN?

Antoni Garrell

Cercle per al Coneixement

<http://www.cperc.net>

Esta mañana he observado el puerto de Barcelona cerrado por las barcas de los pescadores catalanes bajo la atenta mirada de las autoridades portuarias, conscientes de las limitaciones e incapacidades para poner fin al bloqueo. Un poco más allá un número significativo de barcos de todo tipo apuntaban su proa dirección la bocana del puerto mientras esperaban recibir la orden de acabar con la protesta por parte de sus compañeros que negociaban en Madrid la reducción - "subvención" - del precio del gasóleo, abriendo a su vez la puerta a nuevas protestas de todos aquellos a los que la subida del precio de los hidrocarburos les afecta muy directamente. Un buen amigo y compañero del Cercle, con quien compartía la visión, rompió el silencio preguntándose "sobre los límites del derecho de huelga" y hasta donde "la libertad de un colectivo puede condicionar la libertad de los demás". A su pregunta yo contesté con otra: ¿Es justificable, en un mundo globalizado, mantener una actividad productiva que requiere ser subvencionada? Nuestra conversación giró sobre el modelo energético basado en el consumo intensivo del petróleo, la legitimidad e idoneidad, en un mundo abierto y sin fronteras, de mantener las actividades económicas muy dependientes de las subvenciones, la finalidad de las mismas y del convencimiento, para muchos, de que su objetivo básico es el de favorecer actividades de interés general inmediato, descuidando a su vez las iniciativas que permiten afrontar los retos del futuro. Un interés general siempre considerado a escala local, dado que mantener las subvenciones al gasto ordinario, no sólo no soluciona los problemas, sino que impide, con frecuencia, el desarrollo de iniciativas de futuro de los países avanzados y el progreso de aquellos países que por su nivel económico pueden dar rentabilidad a actividades inabordables en el sí de naciones prósperas.



Las protestas de los pescadores, las frecuentes tensiones entre los agricultores, las problemáticas permanentes que aborda la industria y su permanente pérdida de puestos de trabajo, las amenazas que afrontan diversos sectores sometidos a la competencia de localizaciones con legislaciones y costes muy distantes a las nuestras, son, sin lugar a dudas, la prueba evidente de que el modelo de desarrollo económico, requerido para generar los recursos que garantizan el bienestar, el progreso y la paz social, no puede fundamentarse, en los países prósperos, en actividades de bajo valor añadido, cosa que a la vez certifica que los objetivos establecidos en Lisboa están lejos de ser completados tanto por Cataluña como por España.

Precisamente el informe publicado recientemente por el "Consejo Asesor de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información", evidencia que España ocupa las últimas posiciones en cuanto al cumplimiento de la Agenda de Lisboa. Es preocupante constatar el valor del indicador correspondiente a R+D+i, un bajo 3,93 (sobre 7) cuando Finlandia alcanza un 5,87; o el de la empresa en red que se sitúa en un 6,51 en Dinamarca y solamente en un 5,34 en España; o el 4,32 correspondiente a la iniciativa empresarial en contraposición al 5,62 del Reino Unido. Del análisis de los datos se constata que España presenta unos valores muy inferiores a los de los países delanteros, que siguen siendo los del Norte de Europa, y con una tendencia al incremento de la distancia con ellos. Si estos son los datos, - que más allá de la bonanza de las magnitudes macroeconómicas fundamentadas en gran medida en el crecimiento del consumo interno-, certifican los pobres avances de la Sociedad del Conocimiento al no afrontar los retos de la innovación y de la economía del conocimiento, uno no puede obviar los enormes esfuerzos de muchas empresas y colectivos para abordar los desafíos de la globalización, que exige capacidad de innovación en organización, producto y tecnología; centrarse en actividades intensivas en conocimiento y configurar alianzas cooperando por competir en los mercados globales. Son esfuerzos que exigen la atención y actuación decidida de las Administraciones creando ecosistemas que hagan posible la transformación del modelo socioeconómico del país. Políticas que son a largo plazo y que no aportan réditos electorales a corto término, pero de la abordabilidad de las cuales depende el futuro del país y la capacidad de retener entre nosotros aquellos ciudadanos más talentosos y capaces de convertir el avance científico en progreso social.



Subvencionar gastos manteniendo actividades no rentables o invertir en innovación y progreso, es probablemente uno de los dilemas que afrontan los colectivos más avanzados y prósperos. Gasto e inversión resulta una dicotomía que ha de ser abordada sin dilación, sabiendo que el reto no es mantener el presente sino garantizar el futuro, haciéndolo para preservar la reconversión de los sectores afectados, impulsando políticas para facilitar la reinserción al mercado laboral de los trabajadores de los mismos, y no barranto el paso al desarrollo de aquellos colectivos y territorios que han de fundamentar, hoy por hoy, su progreso en la competitividad que aporta el coste de su mano de obra.

Antoni Garrell i Guiu

President

Cercle per al Coneixement